



**GUADALAJARA, JALISCO, 10 DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2021 DOS MIL VEINTIUNO.**

V I S T O para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo radicado con número de expediente anotado rubro, promovido por [REDACTED] en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA y DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE GUADALAJARA, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO.**

R E S U L T A N D O

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 23 veintitrés de abril del año 2021 dos mil veintiuno, [REDACTED], por su propio derecho, promovió juicio administrativo, atento a los motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden.

2.- En proveído de fecha 13 trece de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades demandadas a las ya citadas, y como actos administrativos impugnados, los señalados en el escrito inicial de demanda, consistentes en:

- Cédulas de Notificación de Infracción folios 225489947, 240019183, 254877182, 259466199, 259817692, 263000730 y 279143795 de la Secretaría del Transporte;
- Cédulas de Notificación de Infracción folios 20130044620, 20130187125, 20150262779 y 20161068568 de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco;
- Refrendo Anual de Placas Vehiculares de los años 2012 dos mil doce a 2021 dos mil veintiuno y sus accesorios, de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado.

De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo permitió, requiriendo a las demandadas por los actos reclamados. De lo anterior, se ordenó correr traslado a las autoridades con las copias simples de la demanda inicial y documentos anexos, apercibidas que de no producir contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

3.- Por acuerdo de fecha 30 treinta de agosto del año 2020 dos mil veinte, se tuvo a las autoridades produciendo contestación a la demanda, oponiendo excepciones, defensas y causal de improcedencia; de igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas, desahogándose aquellas que su naturaleza lo permitió. De lo anterior, se ordenó dar vista a la actora. Asimismo, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se ordenó poner los autos a la vista de las partes para



que dentro del término de 3 tres días formularan por escrito sus alegatos, surtiendo efectos de citación para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los arábigos 1º, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco.

II.- La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentran acreditados con las constancias que obran a fojas 21 veintiuno y 22 veintidós del Expediente en que se actúa, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido en los artículos 336, 337 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de este último ordenamiento legal.

III.- Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, procede analizar la causal de improcedencia que hace valer Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en el Juicio Administrativo, al tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como la Jurisprudencia II.1o. J/5, consultable en la página 95 noventa y cinco, Tomo VII, mayo de 1991 mil novecientos noventa y uno, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que reza: “*IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia*”.

a) La Secretaría de Hacienda Pública del Estado, señala que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IX del numeral 29, en relación con el artículo 1º, ambos de la Ley de la Materia, a virtud que *el pago del refrendo se encuentra previsto en una norma de carácter general emitida por el Congreso del Estado, por lo que no es impugnabile ante este Tribunal.*

La causal de improcedencia en análisis **se desestima**, toda vez que la misma encierra cuestiones que guardan relación con el fondo de la litis, las cuales serán tratadas por este juzgador en el Considerando siguiente, por lo que no es dable, por técnica jurídica en el pronunciamiento de la presente sentencia, el avocarse al estudio de los argumentos contenidos en la causal de mérito, cuando los mismos serán tratados con posterioridad. Cobra aplicación al presente criterio, la Jurisprudencia P./J. 135/2001, localizable en la página 5 cinco, Tomo XV, enero



de 2002 dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.”

IV.- Precisado lo anterior y toda vez que no se advierte la actualización de diversas causales de improcedencia y sobreseimiento, procede analizar la litis planteada por las partes, para lo cual, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 50/2010, donde prevaleció la Jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro ***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”*** los conceptos expresados por las partes no se transcriben de manera literal, al estimar que con ello no se causa perjuicio a quienes intervienen en el juicio; no obstante, se precisará en la presente resolución los puntos sujetos a debate derivados de la demanda, contestación y en su caso, la respectiva ampliación.

V.- Primeramente, en lo que respecta a la Cédulas de Notificación de Infracción con número de folios 225489947, 240019183, 254877182, 259466199, 259817692, 263000730 y 279143795 emitidas por la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, tomando en cuenta la manifestación de allanamiento por parte de la misma, respecto de la pretensión del accionante, se estima innecesario entrar al estudio de la Litis planteada acorde a lo dispuesto por el ordinal 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mismo que para una mayor convicción se transcribe:

“...Artículo 42. Admitida la demanda en definitiva se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro del término de diez días. El plazo para contestar la ampliación de la demanda también será de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. Si no se produce la contestación en tiempo, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que no hubieren sido contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

(...)

En la contestación de la demanda y hasta antes del cierre de la instrucción, el demandado podrá allanarse a las pretensiones del demandante si se tratare de la autoridad, el magistrado podrá ordenar de inmediato la revocación del acto origen de la demanda o la expedición del acto que subsane la omisión, según sea el caso...

Determinado lo anterior, este Juzgador declara procedente la pretensión del actor, toda vez que las enjuiciadas se allanaron a la misma, lo que implica su



conformidad con lo pretendido y a la vez su renuncia expresa a su derecho de defensa, en consecuencia, se revoca el acto impugnado consistente en la Cédulas de Notificación de Infracción con número de folios 225489947, 240019183, 254877182, 259466199, 259817692, 263000730 y 279143795, emitidas por la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco.

VI.- Por lo que ve a las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 20130044620, 20130187125, 20150262779 y 20161068568, de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, atento a lo dispuesto por el numeral 72 de la Ley de la Materia, se analizan en primer término las causas de anulación que lleven a declarar la nulidad lisa y llana del acto reclamado, la parte actora alega en su primer concepto de impugnación que *Falta de notificación de los actos administrativos (...)*

Tomando en consideración que la autoridad no exhibió los actos que se le imputan y, analizado el argumento vertido por el actor, se determina que le asiste la razón, a virtud que mediante acuerdo de fecha 30 treinta de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento a las autoridades respecto a tener por ciertos los hechos que el accionante pretendía acreditar con la exhibición de los actos reclamados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 20130044620, 20130187125, 20150262779 y 20161068568, de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, -los cuales dicha demandada omitió acompañar al juicio que nos ocupa, pese haber sido legalmente requerida por esta Sala Unitaria- por cuanto a la ilegalidad de la misma. En consecuencia, al no demostrar el mandamiento por escrito, debidamente fundado y motivado, para sancionar al promovente, se viola en su perjuicio las garantías previstas en el artículo 16 Constitucional, en relación con las fracciones I y III del numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, pues, tomando en consideración la manifestación de la parte actora que nunca le fue notificado dicho acto administrativo, desconociendo su contenido, resultaba obligación para las autoridades, al contestar la demanda, demostrar su existencia mediante la exhibición del citado documento público, conforme al segundo párrafo del numeral 36 de la Ley de Justicia Administrativa, atento a la solicitud previa presentada por el demandante, a efecto que éste estuviera en condiciones de combatirlo mediante ampliación de demanda y, al no hacerlo de esa manera, procede declarar la nulidad lisa y llana del acto reclamado, ello con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 74, en relación con la fracción II del diverso ordinal 75, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al emitirse en contravención a las disposiciones legales aplicables.

Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011, visible a fojas 2645 dos mil seiscientos cuarenta y cinco del Libro III, Tomo 4 cuatro, diciembre de 2011 dos mil once, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

**“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE
ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE**



DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. *Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

Contradicción de tesis 169/2011. *Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno, Décimo Quinto y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 13 de julio de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez.”*

En esa tesitura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 74, en relación con la fracción II del diverso ordinal 75, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se declara la nulidad lisa y llana de los actos reclamados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 20130044620, 20130187125, 20150262779 y 20161068568, de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, al emitirse en contravención a las disposiciones legales aplicables.

VII.- Por cuanto al pago de derechos por refrendo anual de placas vehiculares por el ejercicio fiscal de los años 2012 dos mil doce al 2020 dos mil veinte, en relación al vehículo con número de placas [REDACTED] emitidos por la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la parte actora argumenta en su sexto conceptos de impugnación que *El crédito fiscal por el pago de derechos por el servicio de REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES resulta ilegal por violaciones al artículo 31 constitucional (...)*

Por su parte la autoridad demandada, señala que *contrario a lo expuesto por la parte actora, pues la existencia de diversas cuotas establecidas por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, atiende a que son circunstancias distintas e implica despliegue técnico diverso para un automóvil, motocicleta y placas de demostración, por lo que es completamente legal y procedente el cobro de una cuota distinta para cada supuesto.*

Analizados los argumentos expuestos por las partes, se determina que le asiste la razón a la actora, en razón que el numeral 31 Constitucional, en su fracción IV establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, por su parte, el artículo 44 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y el numeral 2 del Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte, establecen lo siguiente:

“Artículo 44. Todo vehículo para transitar u ocupar la vía pública, deberá contar con los requisitos y condiciones requeridas de acuerdo a lo dispuesto por esta ley



*y su reglamento; para ello **deberán estar inscritos en el registro estatal, en ese caso, deberán portar los elementos de identificación conforme a su tipo y características; tales como placas, tarjeta de circulación, holograma de verificación vehicular** y constancia o póliza de seguro vial vigentes que garantice los daños y perjuicios contra terceros.*

Dichos documentos deberán permanecer inalterables e inmodificables, así como evitar colocar cualquier medio que impida su correcta visualización, según sea el caso.

En el caso de los vehículos de transporte público, en sus distintas modalidades, además de los documentos antes señalados, las unidades deberán portar los rótulos y colores que los identifiquen como prestadores del servicio de que se trate.

Todo conductor deberá portar la licencia o permiso para conducir vigente, de acuerdo al tipo de vehículo de que se trate y conforme a la clasificación establecida en la presente ley y su reglamento”.

“Artículo 2. El Registro Estatal de Movilidad y Transporte, es la base de datos del Ejecutivo del Estado, en donde se administra, reúne y procesa la información relativa a los registros e inscripciones de licencias de conducir, permisos, concesiones, autorizaciones, registros de contratos de subrogación, registros de vehículos del servicio particular y del servicio público del Estado de Jalisco y las modificaciones que sufran y los derechos legalmente constituidos sobre las mismas.

De igual forma es responsable del registro de las cédulas de notificación de infracción y foto infracciones instauradas tanto por el personal de la Policía Vial de la Fiscalía, por los equipos o sistemas electrónicos, así como en las que en su caso, asuma por la coordinación que celebren con los ayuntamientos, actas de alcoholimetría, actas de accidente vial y las demás que por su importancia o trascendencia le instruya el Secretario.

El Registro Estatal de Movilidad y Transporte, forma parte integrante de la estructura orgánica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.”

Del primer precepto transcrito, se advierten los requisitos con los cuales debe contar todo vehículo automotor para ocupar y transitar en la vía pública, entre los cuales, el estar inscrito en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte.

Por su parte, del segundo artículo citado se desprende, que el registro estatal forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, y tiene como función administrar, reunir y procesar la información relativa a los registros e inscripciones de licencias de conducir, permisos, concesiones, autorizaciones, registros de contratos de subrogación, registros de vehículos del servicio particular y del servicio público del Estado de Jalisco, así como inscripción de las modificaciones en la información aludida y los derechos constituidos sobre ellas.

Ahora bien, las normas que se estiman violatorias, esto es, las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de los años 2012 dos mil doce al 2020 dos mil veinte, establecen los montos respecto del pago de derechos por el servicio de refrendo anual de placas vehiculares, los cuales son diferentes por cuanto a las motocicletas y los automóviles, camiones, camionetas tractores automotores y remolques, siendo más elevado el pago de éstos últimos.

En ese tenor, se concluye que la actividad realizada por el Estado a través del Registro Estatal de Movilidad y Transporte consiste en la gestión y



administración de la información, entre otros, de los vehículos automotores de uso particular registrados ante esa institución, por tanto, al establecer un costo diverso para el refrendo de automóviles, motocicletas y placas de demostración, respecto a un mismo servicio prestado, como lo es la gestión y administración de los datos de vehículos automotores, así como el otorgamiento de la tarjeta de circulación y holograma, que hacen constar la convalidación del registro, violenta el principio de equidad tributaria, toda vez que el costo erogado por el Estado para proporcionar el servicio descrito es el mismo, puesto que no se advierte que el despliegue sea distinto para cada uno de los diversos tipos de vehículos.

Cobra aplicación al presente criterio, lo determinado por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la Contradicción de Tesis 20/2017, dando lugar a la Jurisprudencia PC.III.A. J/41 A, visible en la página 1811 del Libro 54, Tomo II, mayo de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que resulta de aplicación obligatoria para esta Sala Unitaria conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, donde concluye con la inconstitucionalidad de las normas que son de idéntico contenido a la que hoy se reclama, al resultar violatorias a los principios consagrados en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, a saber:

“DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. *Los preceptos legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.”*

En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción II y 75 III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, **se declara la nulidad del cobro de Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto de los ejercicios fiscales del año 2012 dos mil doce a 2020 dos mil**



veinte y sus accesorios, quedando a salvo las facultades de la autoridad fiscal, para que, de estimarlo, realice el cobro únicamente de la contribución, debiendo en todo caso aplicar la cuota mínima prevista para las motocicletas en los numerales 24 fracción III, inciso b), de las Leyes de Ingresos del Estado, para los ejercicios fiscales de los años 2012 dos mil doce al 2017 dos mil diecisiete; y 23 fracción III, inciso b) respecto a los ejercicios fiscales del año 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve y 23 fracción III, inciso b) para el ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte.

Con respecto a la prescripción del cobro de Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma del año 2012 dos mil doce al 2015 dos mil quince, resulta inatendible, tomando en consideración que el artículo 90 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, establece la facultad de la autoridad fiscal estatal de declarar o reconocer la prescripción de una obligación ante la Hacienda del Estado y los créditos a favor de éste, junto con sus accesorios, al transcurrir el término de cinco años, contados a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la obligación pudieron ser legalmente exigidos, sin que se realicen gestiones de cobro, es decir, al corresponder a una de las facultades de la autoridad estatal, ya sea de oficio o a petición de parte interesada, corresponde al promovente solicitar, en primera instancia, en sede administrativa la declaratoria o reconocimiento de la prescripción alegada, sin que con ello se contravenga lo dispuesto por el numeral 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, respecto a la opción de agotar los recursos o medios de defensa ante la autoridad o promover el juicio administrativo, en la inteligencia que la declaración o reconocimiento de prescripción a que alude el tercer párrafo del citado artículo 90 del Código Fiscal, no resulta un medio de defensa sino una petición a la autoridad de realizar dicha declaratoria o reconocer que ha prescrito el término para hacer efectivo el crédito fiscal, de lo contrario, **no se estaría frente a un acto definitivo**, entendiéndose éste como la resolución expresa o ficta, con la que se refleje el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento o, bien, como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial.

Ahora bien, la prescripción constituye una sanción en contra de la autoridad hacendaria por su inactividad, derivada de no ejercer su facultad económica coactiva, de modo que bajo esta tesitura, una vez consumado el término de 5 cinco años para que se actualice la figura de la prescripción, el contribuyente podrá hacerla valer de dos formas: **vía acción**, ante las propias autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, o; **vía excepción**, cuando se pretenda cobrar por la autoridad fiscal, a través de los medios de defensa correspondientes, entre ellos el juicio de nulidad, aun cuando la autoridad con posterioridad en que se consumó el plazo de la prescripción haya realizado un acto de cobro y éste no haya sido impugnado por el deudor, ya que la prescripción no se encuentra condicionada a que el contribuyente impugne las gestiones de cobro realizadas con posterioridad en que se consumó el plazo referido.



Por otro lado, la competencia de esta Sala Unitaria para conocer sobre actos emitidos por las distintas autoridades que afecten intereses de los gobernados, se encuentra constreñida a los supuestos de procedencia previstos en el artículo 4, numeral 1, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, a saber:

“Artículo 4. Tribunal - Competencia

1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia para conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales:

I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o municipales:

a) Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares y se consideren definitivos en los términos de la legislación aplicable;

b) Sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios, celebrados por autoridades estatales o municipales;

c) Que impliquen una afirmativa ficta, en los términos de la legislación aplicable;

d) Que sean favorables a un particular, cuando la autoridad estatal o municipal promueva su nulidad;

e) Derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales y cuerpos de seguridad pública, estatales y municipales;

f) Que determinen la existencia de una obligación fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable, y en caso de obligaciones fiscales determinadas conforme a las facultades delegadas a las autoridades estatales por autoridades fiscales federales se estará a lo dispuesto en la normativa federal correspondiente;

g) Que fijen en cantidad líquida una obligación fiscal o den las bases para su liquidación, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable;

h) Que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable;

i) Que cause un agravio en materia fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación aplicable;

j) Que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al reclamante, y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la legislación en materia de responsabilidad patrimonial del Estado;

k) Que constituyan créditos fiscales, por responsabilidades de los servidores públicos estatales o municipales, cuando sean considerados como definitivos; o

l) Que determinen una responsabilidad ambiental, de competencia estatal, en los términos de la legislación aplicable;



(...)"

De las hipótesis antes enlistadas, se desprende la procedencia del juicio únicamente en contra de resoluciones definitivas en materia fiscal, luego entonces, la simple actualización de la figura de la prescripción por el transcurso del término previsto en la norma, no resulta por sí sola una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio administrativo, sin que el contribuyente que afirma que aquella ha operado a su favor, solicitara ante la autoridad fiscal que la declare o reconozca o, en su defecto, que la demandada intentara hacer efectivo el cobro del crédito fiscal, en consecuencia, esta Sala Unitaria no puede pronunciarse sobre la prescripción del crédito fiscal en comento, no obstante, se deja a salvo el derecho del actor para solicitar su actualización ante la autoridad administrativa.

Cobra aplicación al presente criterio, la Jurisprudencia 2a./J. 80/2017 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 404/2016, consultable en la página 246 doscientos cuarenta y seis del Libro 44 cuarenta y cuatro, Tomo I, julio de 2017 dos mil diecisiete, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza:

“PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE DECLARARLA DE OFICIO, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece la competencia de dicho órgano, destacando entre los supuestos de procedencia del juicio, que se trate de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, como pudieran ser, entre otras, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, las que impongan multas por infracciones a normas administrativas federales o las que causen un agravio en materia fiscal. En ese contexto, la omisión de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal no constituye una resolución definitiva, en virtud de que el contribuyente que afirma que aquella ha operado a su favor, no ha solicitado ante la autoridad administrativa que la declare ni, por ende, existe un acto u omisión de ésta que pueda reputarse como una afirmativa ficta, ni se actualiza agravio alguno en materia fiscal que actualice la procedencia del juicio, sin que ello implique un menoscabo al derecho del contribuyente de plantear aquella situación liberatoria, vía excepción, ante la pretensión de la autoridad de hacer efectivos los créditos fiscales. Esta conclusión es congruente con el derecho de acceso a la justicia, el cual no tiene el alcance de que se actúe sin observancia de los requisitos formales previstos por el legislador.

Contradicción de tesis 404/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 26 de abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.”

VIII.- No obstante, respecto al pago de derechos por refrendo anual de placas vehiculares por el ejercicio fiscal del año 2021 dos mil veintiuno, emitido



por la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, se estima **infundado** el alegato de la parte actora, a virtud que, como lo señala la demandada, la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2021 dos mil veintiuno, indica en su numeral 23, fracciones III, inciso a) y III Bis, primer párrafo, lo siguiente:

“Artículo 23. Por los servicios que preste la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Seguridad y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

(...)

III. Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación de PVC con código de seguridad QR para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público:

a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques servicio particular y público: \$688.00

b) Placas de demostración: \$1,668.00

III Bis. Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación en papel para motocicletas: \$276.00

(...)”

De lo anterior, se desprende una diferencia en los cobros que realiza la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado para cada uno de los supuestos en que se encuentren los sujetos obligados, motivado por el tipo de material y elementos de seguridad con los que se elabora cada una de las tarjetas de circulación, es decir, para los automóviles se utiliza material de PVC y se incorpora un código de seguridad QR, a diferencia de las destinadas para las motocicletas, las cuales se emiten en papel y sin código de seguridad QR, situación que implica un esfuerzo y costo diferente en cada caso, respetando los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, puesto que éstos, a diferencia de los impuestos, se entienden como la contraprestación que debe enterarse a la Hacienda Pública del Estado a cambio de los servicios proporcionados por éste, cuya determinación de pago debe corresponder al costo que le implica la prestación del servicio. Cobra aplicación al presente criterio, la Jurisprudencia P./J. 2/98 visible en la página 41 cuarenta y uno, Tomo VII, Enero de 1998 mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente:

“DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. *Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como*



precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos."

Luego entonces, toda vez que la parte actora no acredita con medio de convicción alguno que la emisión del documento denominado "Tarjeta de Circulación" genere un costo diferente al estipulado en la legislación fiscal aplicable, aunado que, como ya se dijo, este Juzgador no advierte violación a derechos humanos en la norma establecida por el legislador, lo procedente es **reconocer la validez** del pago del Refrendo Anual de Placas Vehiculares del año 2021 dos mil veintiuno, al no desvirtuar la presunción de validez que goza. Sin que lo anterior merezca un estudio más profundo sobre el tema de inconstitucionalidad o inaplicación de normas, a virtud que el mismo corresponde a los Órganos Jurisdiccionales de la Federación, en acatamiento a la diversa Jurisprudencia 2a./J. 16/2014, visible en la página 984 novecientos ochenta y cuatro del Libro 5 cinco, Tomo I, Abril de 2014 dos mil catorce, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone:

"CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconventionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal



administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconventionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.

Contradicción de tesis 336/2013. *Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Trigésimo Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.”*

Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73, 74 fracciones I y II y 75, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve a través de los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO.- Se revocan los actos impugnados consistentes en la Cédulas de Notificación de Infracción con número de folios 225489947, 240019183, 254877182, 259466199, 259817692, 263000730 y 279143795, emitidas por la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, por allanamiento del Secretario del Transporte del Estado, a las pretensiones de la parte actora, como se establece en el Considerando V del presente fallo.

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción, en tanto que las autoridades demandadas no justificaron sus excepciones y defensas, en consecuencia;

TERCERO.- Se declara la nulidad lisa y llana de las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 20130044620, 20130187125, 20150262779 y 20161068568, de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, así como del cobro de Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto del ejercicio fiscal de los años 2012 dos mil doce al 2020 dos mil veinte y sus accesorios, de la Secretaría de Hacienda Pública, al emitirse en contravención a las disposiciones legales aplicables, atento a los motivos y fundamentos expuestos en los Considerandos VI y VII de la presente resolución.

CUARTO.- Se ordena a las demandadas la cancelación de las cédulas de notificación de infracción y crédito fiscal descritos en los resolutivos Primero y Tercero del presente fallo, emitiendo el acuerdo correspondiente, realizando las



anotaciones conducentes en el sistema informático con el que cuentan las autoridades demandadas.

QUINTO.- Se reconoce la validez del crédito fiscal determinado por concepto del Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto al ejercicio fiscal del año 2021 dos mil veinte, al no desvirtuar la presunción de legalidad que goza, atento a lo resuelto en el último Considerando de la presente sentencia.

En virtud de que la presente sentencia se dicta dentro del término de Ley con fundamento en lo establecido en el numeral 72 de la Ley de Justicia Administrativa, con la publicación que de ésta se haga en el Boletín Electrónico de éste Órgano Jurisdiccional publicado en la página electrónica www.tjajal.org con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quedan debida y legalmente enteradas las partes del presente juicio.

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO.

Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino López Villaseñor, actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que autoriza y da fe. -----

MAGISTRADO PRESIDENTE

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

SECRETARIO

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS

LLV/POC/mavc
hlja

La Segunda Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente



sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.-----